

La repolitización de la acción colectiva tras el neoliberalismo en el Perú*

Moisés ARCE**

Universidad de Missouri
arcem@missouri.edu

RESUMEN

Revisando las manifestaciones de rechazo a la privatización del servicio eléctrico en Arequipa y otras revueltas contra la inversión extranjera en el Perú, este artículo explora el cambio en las bases de los movimientos de protesta contra la liberalización de la economía. Se sugiere que la transición del gobierno de Fujimori al de Toledo trajo consigo una importante transformación en la estructura de oportunidades políticas, creando un contexto propicio para mayores niveles de movilización e incrementando la capacidad de presión de quienes impugnan las reformas neoliberales y sus posibilidades de éxito. Estas nuevas formas de resistencia colectiva están geográficamente segmentadas o «territorializadas»; presentan demandas concretas y a menudo involucran a actores nuevos, pese a lo cual logran una resonancia nacional. Estos resultados confirman lo que se viene sugiriendo en la literatura relativa a procesos de repolitización de la sociedad, en el sentido de que los actores colectivos se presentan más sensibles a las reformas de mercado en entornos más democráticos.

Palabras clave: neoliberalismo, democracia, protesta social.

* Traducción del artículo «The Repoliticization of Collective Action After Neoliberalism in Peru». *Latin American Politics and Society* 50 (3), pp. 37-62.

** Autor de *El fujimorismo y la reforma del mercado en la sociedad peruana* (Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 2010).

INTRODUCCIÓN

A mediados de junio del año 2002, la población y el gobierno local de la ciudad de Arequipa, Perú, se opusieron a la venta de dos compañías eléctricas estatales: Egasa y Egesur. La protesta se tornó violenta y el gobierno central respondió imponiendo el estado de emergencia y el toque de queda. El levantamiento popular tuvo éxito, pues detuvo el programa de privatización y detonó una crisis de gabinete, debilitando al recientemente instalado gobierno democrático de Alejandro Toledo. Las autoridades locales y la población de Arequipa temieron un incremento de las tarifas eléctricas y el despido de trabajadores. Objetaron la venta de compañías eléctricas que eran rentables bajo la administración estatal del momento.

Similares reacciones violentas contra las reformas de mercado se sucedieron en otras provincias empobrecidas del Perú y de otros países. Por ejemplo, en abril de 2000 los residentes de Cochabamba, Bolivia, lograron expulsar al consorcio extranjero que se había hecho de la administración del sistema de agua de la ciudad. Indignados por el exorbitante incremento en los precios del agua —y convencidos de que el acceso a esta era un derecho humano básico—, los residentes de Cochabamba se opusieron violentamente a los planes de «concesionar la lluvia» (Finnegan, 2002). ¿Qué explica esta ola de protestas localizadas en contra de las políticas de mercado?¹

En la literatura referida a cómo la liberalización económica afecta a la acción colectiva, se observan dos principales corrientes. La perspectiva dominante coloca a la liberalización de la economía como la causa y consecuencia de una extendida despolitización y desmovilización de la sociedad (Kurtz, 2004; Wolff, 2005, 2007) y no espera que la liberalización política pueda regenerar la actividad política y la acción colectiva. Esta literatura, que centra el interés en la fragmentación social, enfatiza las «devastadoras consecuencias» de la crónica crisis económica y su drástica solución neoliberal, cuyos efectos son el incremento de la pobreza y la desigualdad, los altos niveles de desempleo y el descenso en los estándares de vida. Estas condiciones económicas disminuirían las capacidades de acción colectiva de los actores populares y producirían, entre otras cosas, anomia, desorden y desorganización (Zermeño, 1990). Dado que podría decirse que estas condiciones económicas no han cambiado mucho en los años recientes —pese a lo cual es posible presenciar un resurgimiento de las acciones de protesta a lo largo de la región—, esta literatura no logra explicar el fenómeno.

¹ En este estudio, los términos *reforma de mercado* y *reforma neoliberal* son intercambiables e implican políticas que buscan reducir la intervención del Estado en la economía. Los ejemplos incluyen liberalización del comercio, privatización de compañías estatales y liberalización de las finanzas nacionales y extranjeras.

Actualmente, una segunda escuela de pensamiento enfatiza la repolitización de los actores colectivos en los procesos de liberalización económica, en especial en un contexto de liberalización política. Investigaciones recientes han demostrado un incremento en los niveles de la protesta política en Latinoamérica, buscando entender los efectos de esas movilizaciones en importantes procesos políticos. Hochstetler (2006), por ejemplo, examina el rol de las protestas en el abandono prematuro y forzado de presidentes a su cargo. Otros estudios documentan las cambiantes bases de las movilizaciones antigubernamentales contra la liberalización de la economía, incluyendo el surgimiento de nuevas formas de acción colectiva (Garay, 2007; Arce y Rice, 2009) y la segmentación geográfica de las protestas en provincias periféricas (Kohl, 2002; Murillo y Ronconi, 2004). Los desempleados en Argentina, pobladores rurales en Perú, y movimientos indígenas en Ecuador y Bolivia, entre otros, han sido las más importantes fuerzas sociales opositoras a la continuación de las políticas neoliberales.

Estudios empíricos recientemente realizados en diversos países han mostrado también que la liberalización económica trae consigo mayores niveles de protesta cuando coincide con regímenes más abiertos y democráticos (Arce y Bellinger, 2007). Pese a ello, como es ampliamente conocido, el análisis transversal de múltiples casos a menudo no logra observar los mecanismos que hacen a los actores sociales reaccionar ante las políticas de liberalización económica. Además, con frecuencia estos análisis sufren de un sesgo analítico en favor de los procesos nacionales de cambio económico y político, pasando por alto importantes cambios en los niveles subnacionales. Las ampliamente extendidas reformas descentralizadoras en América Latina han transformado el proceso de toma de decisiones en favor de niveles más bajos en el sistema político, de modo que probablemente la dirección de las acciones de protesta ha cambiado en décadas recientes. La literatura existente continúa pasando por alto estos cambios en los niveles subnacionales. En algunos casos, esas movilizaciones han sido incluso más violentas que las anticipadas por la literatura que asocia liberalización de la economía con exclusión social y anomia.

Intentar comprender la interrelación entre la liberalización económica y la política se ha vuelto un tema central en los estudios de política comparada en América Latina, en la búsqueda por entender cómo estos dos fenómenos se contradicen o complementan entre sí (Przeworski, 1991; Haggard y Kaufman, 1995). El enfoque que pone énfasis en la fragmentación sugiere que la liberalización económica y la política han estado en curso de colisión durante los últimos dos décadas y que la democracia ha sufrido las implicancias de su impacto, mientras que las fuerzas de la liberalización económica permanecen incólumes en la arena política. La consecuencia es que la democracia se ha visto reducida a un mero procedimiento y que resulta irrelevante para los actores sociales afectados por la liberalización económica. En contraste, la perspectiva que enfatiza la repolitización señala a la democracia como una protección que puede ayudar a corregir los excesos de las políticas de

liberalización económica, ya sea través de elecciones o en formas de protesta extra-institucional.

Este artículo parte de esa última aproximación. El argumento en este caso es que las políticas de democratización y de apertura del sistema político, aunque imperfectas, importan, y han tenido influencia en las respuestas societales frente a la liberalización económica. Es teórica y sustantivamente importante, por tanto, saber cómo la liberalización política condiciona las respuestas societales frente a la económica.

Analizando el 'arequipazo' —como se conoció a la revuelta antiprivatización— y muchas movilizaciones locales más contra la inversión extranjera en otras regiones del Perú, este artículo busca explicar el cambio en las bases de la acción colectiva que ha resultado de la liberalización de la economía. En lugar de la completa erosión de la capacidad de acción colectiva de la sociedad civil, como sugeriría la literatura que enfatiza la fragmentación, otras formas de protesta han reemplazado a la más tradicional, basada en la esfera laboral, como la más importante reacción social frente a la reestructuración neoliberal. Por extensión, los puntos centrales donde las protestas más significativas toman lugar se han desplazado fuera de las áreas metropolitanas. Considerando estos patrones alternativos de acción colectiva, incluyendo tipos de protesta y sus ubicaciones territoriales, podemos empezar a discernir cómo la liberalización económica ha transformado el panorama social en la América Latina contemporánea. Estudios existentes no dan cuenta de estos cambios en los repertorios de protesta, o estos aparecen simplemente como datos agregados para servir como base de investigaciones comparativas.

Las revueltas en provincias, como aquellas de Arequipa y Cochabamba, recuerdan los 'estallidos provinciales' de Argentina, que tuvieron lugar a inicios de 1990 (Auyero, 2002). Estos levantamientos territorializados o geográficamente segmentados representan «protestas memorables», dados su tamaño, duración, intensidad, resonancia, y simbolismo (McAdam, Tarrow y Tilly, 2001). Han tenido, además, efectos políticos desestabilizantes. En el caso peruano, como muchos políticos admitirían, las aparentes fallas de Toledo en su gobierno comenzaron con el 'arequipazo', que «inmediatamente resonó a nivel nacional» (Banco Interamericano de Desarrollo, 2005, p. 116) y luego se esparció a otras áreas².

En este contexto, el presente estudio rastrea transformaciones en los repertorios de la protesta social. Explica cómo la transición del régimen de Alberto Fujimori al de Alejandro Toledo llevó a una mayor liberalización política, un cambio que, tal como enfatizan las teorías de oportunidad política, crea un medio ambiente más propicio para mayores niveles de movilización. Los esfuerzos descentralistas de

² Según el antiguo vicepresidente de Toledo, David Waisman, el gobierno perdió mucho de su autoridad cuando el antiguo primer ministro Roberto Dañino, anticipando el conflicto potencial con Arequipa, decidió ir a Washington en los días inmediatamente previos al anuncio de las privatizaciones (*El Comercio*, 2004). El gobierno parecía estar dividido, y subsecuentemente, la culpa por los procesos de privatización se atribuyó al presidente Toledo.

Toledo no solo expandieron oportunidades políticas, sino que ayudaron a territorializar un número de conflictos sociales. El ciclo de actividad beligerante en Perú está ejemplificado por el levantamiento de Arequipa y otros conflictos geográficamente segmentados contra la inversión extranjera. Muchos estudiosos (por ejemplo Maxfield, 1997) han identificado a la inversión extranjera como el distintivo de la globalización y las políticas de liberalización económica; por tanto, estos conflictos pueden ser vistos como reacciones a las políticas neoliberales.

LOS CAMBIANTES REPERTORIOS DE LA PROTESTA SOCIAL

Mucho de la discusión acerca de cómo la liberalización económica ha debilitado la capacidad de acción colectiva de las organizaciones tradicionales —sindicatos de trabajadores en particular— se enfoca en la tendencia decreciente en el número de huelgas. Revisando las tasas de huelgas en cinco países latinoamericanos (México, Chile, Ecuador, Bolivia y Perú), Kurtz concluye que «el nivel de protesta sindical ha declinado a un nivel casi inexistente, donde aún quedaban rastros de él» (2004, p. 292). El número de huelgas, en todo caso, no da cuenta de las nuevas y diversas movilizaciones, dirigidas por una variedad de nuevos actores, que están dando forma al patrón de protesta en Argentina, Bolivia, Perú, Venezuela y otros (Auyero, 2002; Delamata, 2002; López-Maya, 2002; Lucero, 2001; Garay, 2007). Las movilizaciones sociales también se han fragmentado geográficamente o territorializado en regiones periféricas o provincias del interior. Estos dos fenómenos están interrelacionados. Los patrones alternativos de acción colectiva se aproximan a la descripción de Polanyi en 1944 del «doble movimiento» del mercado. Un incremento en la liberalización de la economía impone altos costos sociales y es contrarrestado por respuestas societales que buscan proteger a los pobres frente a los efectos devastadores de un mercado desregulado.

Una revisión preliminar de los patrones de acción colectiva en algunos países de América Latina revela un cambio en el patrón de protesta social, de formas de acción colectiva institucionalizadas a no institucionalizadas³. Al trasladar los espacios importantes de tomas de decisiones hacia abajo en el sistema político, la descentralización administrativa y política resulta una de las principales fuerzas que contribuyen a la segmentación de las acciones de protesta (Murillo y Roncoci, 2004; Kohl, 2002). La descentralización, por cierto, ha cambiado la dirección de las protestas de los gobiernos nacionales a los subnacionales, aunque no logre explicar las razones que se encuentran en su base.

En Argentina, Auyero señala: «las huelgas en las fábricas han dejado de ser la forma predominante de protesta, siendo reemplazadas por bloqueos de carreteras

³ Para una distinción más clara entre formas de actividad política institucionalizada y no institucionalizada, ver Huntington (1968, p. 196).

de rutas provinciales y nacionales» (2002, p. 190). En esa línea, Delamata (2004, p. 26) reporta aproximadamente 4676 caminos bloqueados durante el periodo 1997-2002. Los bloqueos de carreteras se incrementaron de 514 en el 2000 a 1383 en 2001, y a 2336 en 2002. En un estudio sobre huelgas de maestros, Murillo y Roncoci (2004, p. 78) notaron cómo la descentralización de servicios sociales en Argentina resultó en un «patrón desigual de provincialización de la protesta». De forma similar, en la Venezuela contemporánea, López-Maya y Lander (2004, pp. 215-217) notan un «dramático incremento en el número de protestas callejeras». Basados en reportes de noticias para el periodo 1985-1999, sus cifras «revelan la preponderancia de disturbios sobre aquellas formas más convencionales, pacíficas, de protesta, empleadas frecuentemente en la historia de la democracia venezolana»; al mismo tiempo, muestran una alta cantidad de «actividades de protesta ilegal», como bloqueo de carreteras, invasión y ocupación de tierras.

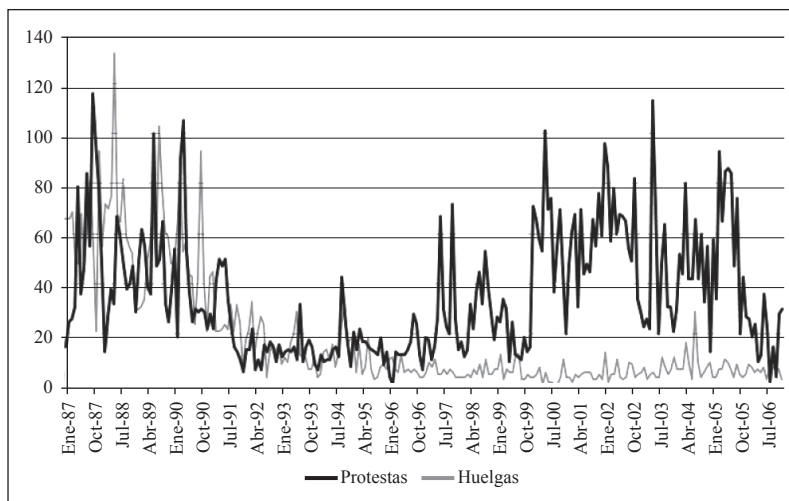
En Bolivia, Laserna y Ortega (2003) observaron que el bloqueo de rutas, los ataques a edificios públicos y las marchas están dominando los patrones actuales de conflicto social, más que las huelgas laborales. De forma similar al caso argentino, según Kohl, la descentralización en Bolivia ha «servido para territorializar la oposición a las políticas económicas neoliberales y de privatización, y en ciertas áreas, para reforzar movimientos sociales regionales» (2002, p. 449). Revueltas localizadas en las provincias del interior emergen también en el Perú, donde las iniciativas de reforma descentralista recién han comenzado. Como en el llamado 'arequipazo' peruano, la Cochabamba anterior a la «guerra por el agua» era la provincia boliviana con los índices más altos de conflictos, luego de La Paz, capital del país (Calderón y Sz mukler, 2000, pp. 335-346). Ambos, Arequipa y Cochabamba, tuvieron alta incidencia de movilizaciones en comparación con otras provincias en Perú y Bolivia, respectivamente.

Recientes olas de protesta han reunido a numerosos grupos de la sociedad civil, incluyendo indígenas, estudiantes, organizaciones de mujeres, grupos religiosos y sectores de la clase media. Creadas sobre la base de redes sociales preexistentes, las movilizaciones a veces ocurren virtualmente de forma espontánea, sin planeamiento o coordinación general. Manteniendo la naturaleza cíclica de la movilización popular (Tarrow, 1998), a menudo los movimientos de resistencia y coaliciones de protesta muestran ser solo transitorios y desaparecen al corto tiempo, luego de que un conflicto es resuelto o las oportunidades políticas se cierran (Wolff, 2007). No obstante, en ocasiones han sido altamente efectivos en paralizar sus sistemas —tanto económico como político—, hasta que sus demandas fuesen atendidas o hasta que algunas medidas específicas de reforma sean revertidas.

La figura 1 muestra la información mensual extraída de reportes de noticias sobre protestas sociales en Perú durante el periodo 1987-2006. Según la información disponible, estas movilizaciones superan en número las huelgas laborales tradicionales, sobre todo empezando el final de la década de Fujimori. Más que

representar o evidenciar atomización social o apatía política —como se argumentó convencionalmente sobre los efectos de las reformas de mercado—, estas cifras dan cuenta de los desenlaces de la continuación de las políticas neoliberales, donde la acción colectiva simplemente cambia en vez de desaparecer. La figura 1 nos ayuda a visualizar el efecto paradójico del neoliberalismo: al tiempo que debilita ciertos tipos de resistencia popular, activa otros nuevos.

Figura 1. Número de protestas sociales y huelgas en el Perú, 1987-2006



Fuente: Los datos sobre huelgas vienen del Instituto Nacional de Estadística e Informática (2005). Los datos sobre protestas se extrajeron de la «Base de protestas sociales del Perú» (Arce, 2010). Elaboración propia.

En particular, los más recientes reportes de la Defensoría del Pueblo en Perú colocan a las movilizaciones contra la inversión extranjera como el tipo de conflicto social más común en este país. Estas protestas representan el 50 por ciento de todos los conflictos (Defensoría del Pueblo, 2009). Las movilizaciones confrontan a las comunidades contra firmas mineras transnacionales grandes y medianas que buscan extraer recursos de áreas aledañas. Este tipo de conflictos localizados se originan en razón de la minería y la contaminación ambiental que trae consigo (Defensoría del Pueblo, 2009). De forma similar al 'arequipazo', estos conflictos están territorialmente delimitados y se originan debido a un tema específico, pese a lo cual tienen alta visibilidad e impacto económico.

LA CAÍDA DE FUJIMORI

Las teorías de oportunidad política enfatizan cambios en el ambiente político inmediato, ya sea para facilitar o para limitar las posibilidades de acción colectiva. Estos cambios

pueden incluir el grado de apertura relativa del sistema político institucionalizado, la estabilidad o inestabilidad de las alianzas entre las élites, la presencia o ausencia de aliados, y la capacidad y propensión del Estado a la represión. Las fuentes de descontento económico, en contraste, son pensadas como constantes e inherentes a todas las sociedades; aun así, el descontento juega un rol vital en dar forma y echar a andar una acción colectiva exitosa (por ejemplo Tarrow, 1998; McAdam, Tarrow y Tilly, 2001).

La transición de Fujimori (1990-2000) a Toledo (2001-2006) significó un cambio mayor en la estructura de oportunidades políticas que permitió un mayor uso de la protesta como recurso. Esta idea central se muestra consistente con las investigaciones existentes en la materia, que sugieren que procesos de liberalización política crean un ambiente propicio para grandes niveles de movilización, mientras incrementan su capacidad de presión y sus posibilidades de éxito (por ejemplo Yashar, 1998, pp. 31-32; Arce y Bellinger, 2007). Luego del autogolpe de 1992, Fujimori recentralizó la autoridad política y creó un sistema con pocas o ninguna posibilidad de veto a sus iniciativas, lo que le permitió llevar adelante dramáticas políticas de reforma. Durante este periodo, Fujimori disfrutó de mayoría en el Congreso y fue capaz de minimizar la disensión política dentro de su propio partido, agilizando la aprobación legislativa para las iniciativas del Ejecutivo. Esta rígida disciplina colocó al Congreso en una posición más aislada y menos conectada con la sociedad, lo que permitió a la mayoría fujimorista pasar por encima de cualquier tipo de oposición política.

Fujimori también revirtió la política descentralista que creó trece gobiernos regionales en 1989, cerrando cualquier espacio político a posibles contendientes, y estuvo menos dispuesto a responder a reclamos desde la sociedad, particularmente aquellos causados por la implementación de las reformas de mercado. Además de apuntalar sus tendencias autoritarias, que han sido ampliamente documentadas (Carrión, 2006; Conaghan, 2005), estas circunstancias crearon un sistema político cerrado que acalló a los grupos de oposición.

El gobierno de Fujimori, en efecto, estuvo caracterizado por un declive general en el número de huelgas, en buena cuenta porque el ambiente político deslegitimó el uso de la protesta y las condiciones económicas erosionaron y debilitaron las posibilidades de acción colectiva (Roberts, 1996, p. 81; Tanaka, 2002, p. 7). Para ser más exactos, hubo algunas huelgas y revueltas provinciales, pero tuvieron un éxito limitado. A comienzos de 1990, por ejemplo, profesores sindicalizados organizaron una huelga importante; duró casi cuatro meses y llegó a su fin principalmente por fatiga, luego de que el gobierno ofreciera concesiones mínimas (Caretas, 2003). En el nivel regional, en 1997 el alcalde de Huancavelica, Federico Salas, capturó la atención nacional al realizar una cabalgata de una semana de duración a Lima con la expectativa de encontrarse con Fujimori para discutir los problemas de su ciudad. Fujimori se rehusó a recibirlo, y Salas retornó con las manos vacías (*Debate*, 1997)⁴.

⁴ Fujimori posteriormente cooptó a Salas, en el año 2000 lo hizo primer ministro.

En contraste con el régimen autoritario de Fujimori, el gobierno democrático de Toledo proveyó un ambiente que facilitaba mayores espacios de movilización. Contrariamente a lo que sucedió con Fujimori luego de su autogolpe, Toledo no tuvo el apoyo de la mayoría en el Congreso, y los desacuerdos con su partido político fueron habituales. En efecto, muchos observadores han notado que la oposición política más fuerte contra Toledo vino de su propio partido: Perú Posible.

En el año 2002, Toledo reinició el proceso de descentralización que el régimen de Fujimori interrumpió. La descentralización dispersó considerablemente el poder político del gobierno central hacia los gobiernos regionales y creó nuevas oportunidades para que los partidos de oposición ocuparan posiciones de gobierno, espacios que Perú Posible no logró ganar para sí. Toledo también buscó aliviar las brechas asociadas con las reformas neoliberales; de este modo, se incrementó la probabilidad de éxito en las movilizaciones contra este tipo de políticas. En general, el mayor acceso al poder político —desde el Congreso hasta el partido de Toledo, pasando por los nuevos gobiernos regionales— permitió a los rivales movilizarse y oponerse de forma efectiva a nuevas políticas de reforma.

No es sorprendente que el gobierno democrático de Toledo encarara muchas movilizaciones. Según la revista semanal *Caretas*, en el año 2002 la ciudad de Lima vivió al menos ochocientas protestas diferentes, una estadística no vista en la década previa (*Caretas*, 2002a, con información del Ministerio del Interior 2002). El 11 de noviembre de ese año hubo veinticuatro manifestaciones en Lima: una protesta por hora.

Fuera de la capital, en setiembre del año 2001 campesinos en Cusco tomaron el aeropuerto de la ciudad demandando la construcción de una vía de acceso a Quillabamba (*Semana Económica*, 2001). Más adelante, ese mismo mes, residentes de Puno arribaron a Lima para pedir al gobierno que la construcción de la Carretera Interoceánica entre Perú y Brasil atravesara su departamento en lugar de pasar por el Cusco (Llosa, 2003). El siguiente mes, quince diferentes alcaldes de tres regiones atacadas por la pobreza: Junín, Huancavelica y Ayacucho, arribaron a Lima demandando más obras públicas (*Caretas*, 2002c). Al menos trece diferentes departamentos, en su mayoría de las regiones pobres del país, albergaron muchos conflictos activos y latentes que involucraban a comunidades locales, corporaciones mineras multinacionales y la extracción de recursos naturales. Quizá no hubo protestas tan poderosas como la que sacudió a Arequipa en junio de 2002, donde los ciudadanos se resistieron violentamente a la venta de las compañías eléctricas. En general, este recrudescimiento de las protestas territorialmente localizadas no tenía precedentes (Ballón, 2002).

En comparación con el régimen autoritario de Fujimori, el gobierno de Toledo mostró una mayor voluntad de acoger demandas regionales y sociales. En mayo de 2003, cerca de trescientos mil profesores sindicalizados exigieron un aumento en sus salarios y amenazaron con un nuevo paro si no se satisfacían sus demandas.

En un inicio, los representantes del gobierno declararon que las restricciones fiscales hacían imposible acoger las demandas de los profesores (*Gestión*, 2003b). Estos decidieron ir a la huelga, y luego de casi cuatro semanas de negociaciones, el gobierno ofreció un incremento salarial de cien nuevos soles (*Gestión*, 2003a).

El aumento salarial no disuadió a los profesores de organizar huelgas. De forma similar, en Arequipa, el exitoso levantamiento de una semana de duración desbarató la privatización de los generadores de electricidad de la ciudad y provocó las renuncias de varios miembros del gabinete. En 2006, semanas de protestas y bloqueos de carreteras protagonizados por pobladores en Cajamarca paralizaron las operaciones de Newmont, la compañía minera de oro más grande del mundo.

Es interesante que, desde el año 2000, los peruanos han mostrado actitudes favorables hacia este tipo de movilizaciones: en una encuesta, el 84 por ciento de entrevistados aprobó la huelga de profesores (Apoyo, 2003), y el 58 por ciento estaba a favor de las movilizaciones de protesta en general (Apoyo, 2002b). Además, el 72 por ciento afirmaba que las revueltas antiprivatización en Arequipa fueron justificables, mientras que el 68 por ciento desaprobaba el manejo que el gobierno dio a esta situación (Apoyo, 2002a)⁵. En contraste, los empresarios repudiaron los efectos de aquellas movilizaciones sobre la propiedad privada y sobre el clima de inversión en el país, demandando una posición más firme al gobierno de Toledo (*El Comercio*, 2007).

DESCENTRALIZACIÓN Y SEGMENTACIÓN GEOGRÁFICA DE LA PROTESTA

Como señala Tarrow, los «periodos de desorden generalizado a veces resultan en represión inmediata, a veces en reforma, a menudo en ambas» (1998, p. 8). Buscando aplacar los problemas económicos de las provincias periféricas y descentralizar el Estado, en noviembre de 2002 Toledo llamó a elecciones en veinticinco gobiernos regionales. Cada una de esas regiones eligió a un presidente. Las autoridades regionales fueron instaladas para complementar la estructura gubernamental preexistente, que involucraba a 24 departamentos, 195 provincias, y 1828 distritos. Entre las provincias, la ciudad puerto del Callao disfrutó de un estatus especial por su importancia económica. El proyecto de regionalización proveyó de representación política al nivel departamental, así como también a la Provincia Constitucional del Callao.

La descentralización en el Perú no es nueva (Slater, 1991; Contreras, 2000). A finales de la década de 1980, el gobierno de Alan García buscó la creación de trece

⁵ Las preguntas fueron: «¿Aprueba o desaprueba usted la huelga del SUTEP [Sindicato Unico de Trabajadores en la Educación del Perú]? ¿Diría usted que aprueba o desaprueba los movimientos de protesta en general? ¿Usted diría que las protestas en Arequipa contra la privatización de Egasa y Egesur estaban justificadas o no estaban justificadas? ¿Aprueba o desaprueba la manera como el gobierno enfrentó inicialmente la crisis en Arequipa?».

regiones, pero estas unidades subnacionales fueron desmanteladas por el régimen de Fujimori luego del autogolpe en 1992. Antes de las elecciones regionales en noviembre de 2002, los departamentos eran considerados unidades administrativas del gobierno central, que se encargaban de señalar prefectos para cada uno. Desde comienzos de la década de 1980, en contraste, alcaldes provinciales y distritales han sido elegidos en elecciones municipales cada tres años⁶.

Muchos observadores coinciden en que la iniciativa descentralista de Toledo fue altamente desorganizada e improvisada (Tanaka, 2002, p. 25). Desde el punto de vista del economista Gonzales de Olarte (2002, p. 18), el apresuramiento del proceso de descentralización puso en evidencia la impaciencia de un gobierno presuroso por combatir los problemas del desempleo y desarrollo frente a una población ansiosa. Ni los votantes, ni aquellos que buscaban ocupar los gobiernos regionales, supieron qué era exactamente lo que estos gobiernos subnacionales supuestamente debían hacer (*Perú Económico*, 2002b). Las leyes que estructuraron estos nuevos espacios institucionales para la representación política fueron aprobadas meses después de las elecciones de noviembre y continuaron siendo revisadas luego de esa fecha. Además de esto, menos de un tercio de la población creyó que la regionalización aplacaría el surgimiento de nuevas protestas sociales (Apoyo, 2002c)⁷.

Aunque mucha gente dio la bienvenida al manejo gubernamental descentralizado, este también dispersó considerablemente el poder político del gobierno central, creando puntos de veto para que los opositores movilizaran fuerzas contra el gobierno en ciertos casos, o en otros, para enfrentarse a la asignación de ingresos del Estado por el gobierno central. En otras palabras, la descentralización expandió las oportunidades políticas, al tiempo que ayudó a la segmentación geográfica de los conflictos sociales. Ni el gobierno de Toledo —que empezó el proceso de descentralización— ni el segundo gobierno de García —que continúa apoyándola— han sido capaces de ganar para su partido las riendas de los gobiernos subnacionales, y de ese modo, el potencial de conflicto entre las autoridades regionales y las del gobierno central se ha incrementado. En las elecciones regionales de 2002, por ejemplo, el partido de Toledo, Perú Posible, ganó un solo gobierno regional: el Callao. El grueso de las presidencias regionales fue ganado por el partido aprista (APRA) (doce regiones) y movimientos independientes (ocho regiones)⁸. Aun así, lo alcanzado en las elecciones por el APRA duró muy poco, lo que subraya la fragmentación

⁶ Históricamente, las provincias y distritos fueron fiscalmente dependientes del gobierno central. Estas unidades subnacionales representaron el 6 por ciento de la base de ingresos del país y el 12 por ciento de su gasto. Para mayor información, ver Banco Mundial (2003); *Perú Económico* (2002a).

⁷ La pregunta fue: «¿Cree que las protestas sociales aumentarán, seguirán igual o disminuirán a partir de la regionalización?» En las respuestas, 31 por ciento afirmó que las protestas sociales se incrementarían, 34 por ciento que se mantendrían igual, y 25 por ciento que decrecerían.

⁸ Como Toledo señaló «en las elecciones regionales [el APRA] nos han comido con zapatos y todo» (*La República*, 2003).

continua del sistema de partidos en el Perú. En las elecciones regionales de 2006, el control del APRA se redujo a solo dos regiones: La Libertad y Piura. En el resto del país, veintitrés partidos o movimientos independientes distintos ganaron gobiernos regionales.

Esta proliferación de partidos y movimientos regionales sin afiliaciones a partidos nacionales sugiere que los políticos regionales generalmente se encuentran «suelos» y, por lo tanto, se muestran propensos a exacerbar problemas de coordinación con el gobierno central⁹. En efecto, partidos políticos débiles y un sistema de partidos pobremente institucionalizado, como se ve en el Perú, son incapaces de canalizar las demandas del sector popular al Estado, y mucho menos responden a ellas de forma efectiva (Mainwaring y Scully, 1995). La carencia de receptividad hacia la sociedad podría alimentar la protesta social, ya que distintos grupos presionan desde fuera al sistema político¹⁰.

La descentralización en Perú también ha servido para territorializar un número importante de conflictos políticos. Basándonos en los reportes más recientes de la Defensoría del Pueblo de Perú (2009), en la actualidad el segundo tipo de conflicto más importante en número de casos coloca a los pobladores en contra de la corrupción o ineficiencia de las autoridades locales. Estos conflictos representan 14 por ciento del total. De forma coincidente con esta información, en menos de un año desde la creación de estas regiones, nueve de veinticinco gobiernos regionales han enfrentado investigaciones por fraude y corrupción (*Correo*, 2003; *El Comercio*, 2003a). Autoridades regionales en Áncash, por ejemplo, fueron acusadas por malversación de fondos públicos: los cargos se relacionaban a la desaparición de fondos de emergencia asignados por el Ministerio de Economía y Finanzas (*El Comercio*, 2003b). El presidente regional de Lima, Miguel Ángel Mufarech, también encaró una investigación del Congreso a causa de las promesas electorales hechas a sus acreedores (*El Comercio*, 2003c). En una llamada telefónica grabada, Mufarech declaró que su elección como presidente de la región Lima era un resultado previsto y ofreció a sus acreedores «miles de oportunidades de negocios» para saldar sus 240 000 dólares de deuda. En la región Apurímac, más de mil bolsas de cemento donadas por Cementos Lima al gobierno regional desaparecieron y fueron encontradas en la casa de la madre del presidente de la región. El presidente regional de Arequipa, Daniel Vera Ballón, encaró una investigación judicial por desviar fondos originalmente destinados a inversión hacia la contratación de personal, sobre la base de prácticas de padrino y nepotismo. Las regiones de Áncash, Lima, Apurímac y Arequipa fueron gobernadas por el APRA. Dada la ausencia de un marco efectivo de rendición de cuentas, pareciera que la regionalización en el Perú ha servido también

⁹ Agradezco a un crítico anónimo por esta sugerencia.

¹⁰ Arce y Rice (2009) examinan cómo la competencia entre partidos políticos da forma a los niveles de protesta social en Bolivia.

para «descentralizar la corrupción»; de forma similar a lo observado por Kohl en el caso boliviano (2002, p. 462).

Comparar la experiencia de descentralización con países como Bolivia revela que la recuperación de las economías provinciales, que sirvió como una motivación para promover la descentralización en el Perú, requiere más que transferencias fiscales desde el gobierno nacional. Desde mediados de la década de 1990, el gobierno central de Bolivia había transferido 20 por ciento de las rentas públicas a las municipalidades; muchas de ellas recientemente creadas. El gobierno central también cedió responsabilidades en las áreas de salud, educación, infraestructura y cultura (Grindle, 2000). Desde 1990, sin embargo, el país ha estado paralizado por una ola de huelgas sectoriales y protestas localizadas; la «guerra por el agua» en Cochabamba fue quizás la más visible (Nickson y Vargas, 2002; Assies, 2003).

Mientras maestros y miembros de la policía nacional demandaban salarios más altos, los cocaleros protestaban por el programa de erradicación de hoja de coca promovido por los Estados Unidos. En la mayoría de los casos, el gobierno de Hugo Banzer terminó cediendo: la Policía nacional consiguió aumentos salariales, los grupos indígenas obtuvieron concesiones agrícolas y la privatización del agua de Cochabamba se revirtió. Enfrentado a protestas de gran escala, el gobierno de Hugo Banzer «mostró gran moderación», en gran parte para «superar su vieja reputación de brutalidad, cosechada cuando gobernaba como dictador en los setentas» (*The New York Times*, 2000). El gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003) no encontró sino descontento organizado de la población, harta de las reformas neoliberales (Barr, 2005; *The New York Times*, 2003). En octubre de 2003, un mes de continuas protestas sociales que dejaron setenta muertos, el presidente Sánchez de Lozada se vio forzado a renunciar al cargo.

Refiriéndose al ciclo actual de protestas en Bolivia, Barr nota que «las demandas de agricultores, profesores, mineros, policías, jubilados y otros manifestantes no han sido de un tipo ideológico o particular, sino que reflejan preocupaciones muy concretas sobre asuntos económicos y de condiciones de vida» (2005, p. 70). Como en el Perú, la diversidad de grupos tomando las calles en Bolivia es una muestra de cambios en los repertorios de protesta social, en que la acción colectiva tradicional basada en clases casi ha desaparecido. En su lugar, actores sociales diversos y nuevas formas de protesta han emergido para tomar la conducción en los esfuerzos de resistencia popular. Conflictos geográficamente segmentados forman parte de un amplio rechazo hacia las políticas neoliberales y sus efectos posteriores. La manera en que las políticas económicas neoliberales han sido diseñadas e implementadas, de arriba hacia abajo, ha exacerbado la sensación de exclusión. Ello ha contribuido al resurgimiento de una conducta propensa a la protesta. En algunos casos, los gobiernos parecieran tener poco espacio para maniobrar frente a ellas.

Mientras que la transición de Fujimori a Toledo generó un contexto político más propicio para la movilización social, la economía de la región de Arequipa se

estancó y declinó, con una emigración de negocios y empleos hacia la mitad de la década de 1990. Estas pérdidas económicas sirvieron para movilizar a ciudadanos de los distintos sectores de la sociedad arequipeña.

EL 'AREQUIPAZO'

Para fines de la década de 1990, el departamento de Arequipa tenía la tasa de desempleo más alta en el país: 15 por ciento (*Perú Económico*, 2001). En promedio, el Producto Bruto Interno (PBI) departamental, como parte del total del país, declinó de 6 por ciento en el periodo 1991-1995 a 5 por ciento en periodo 1996-2000. Específicamente, el Índice de Desarrollo Humano de Arequipa cayó de un rango de 0,695 en 1997 a 0,635 en 2000. Esta última estadística se mostró solo ligeramente mejor a la de 0,633 registrada en 1993 (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2002)¹¹.

En la década de 1990, durante el auge del neoliberalismo, importantes industrias locales en búsqueda de mercados y mayores ganancias gradualmente comenzaron a mover sus centros de producción a la ciudad capital, Lima; dicho cambio contribuyó a la alta tasa de desempleo en Arequipa. Compañías que se mudaron a la capital incluyeron a Aceros Arequipa S.A. (industria del metal), Cervesur (cervecería) y Leche Gloria (planta de procesamiento de leche). Estas compañías fueron íconos de una identidad local definida, por lo que su éxodo a Lima fue un indicador —tanto como un contribuidor— del debilitamiento de la economía provincial. El alcalde provincial al momento del 'arequipazo', Juan Manuel Guillén, remarcó: «como la gran mayoría de los peruanos, nosotros solo fuimos testigos de este proceso» (2003). Otras fuerzas económicas y políticas también contribuyeron a una eventual movilización.

Condiciones económicas

La asignación de crédito fue otro indicador de la contracción de la actividad productiva en Arequipa. En una acción que se consideró necesaria para sostener la disciplina macroeconómica, a comienzos de la década de 1990 el gobierno de Fujimori liquidó un número de bancos de desarrollo descentralizados pertenecientes al Estado, originalmente diseñados para el apoyo a la agricultura, manufactura y minería; de este modo se dejaron las decisiones de asignación crediticia por completo al sector privado. La participación en Arequipa del total de préstamos privados en el país durante este periodo fue de aproximadamente 5 por ciento. A comienzos de la década del año 2000, la asignación de crédito en la región se redujo a 2,5 por ciento.

¹¹ El Índice de Desarrollo Humano es un resumen compuesto de índices que mide los alcances promedio de un país en tres aspectos básicos del desarrollo humano: longevidad (expectativa de vida), conocimiento (alfabetismo), y un estándar de vida decente (PBI per cápita).

En contraste, la participación de Lima en préstamos privados se incrementó de 83 por ciento en 1990 a 87 por ciento en 2002 (Superintendencia de Banca y Seguros, 2003). Arequipa es la región con el segundo más alto porcentaje de asignación de crédito privado luego de Lima.

Si bien Lima ha recibido históricamente la mayor parte del préstamo privado (Caravedo Molinari, 1988, p. 24), este patrón se incrementó considerablemente por la fusión de varios bancos provinciales, como el Banco del Sur y Banco Regional del Norte, con bancos de mayor tamaño de la capital. Aun cuando bancos más grandes y nuevos operaban ahora en las regiones, las decisiones de crédito para ciudades como Arequipa todavía se realizaban en Lima (*Perú Económico*, 2001).

El tamaño de la economía de Lima podría explicar la mudanza masiva de compañías locales y la posterior concentración de préstamos privados en la capital. En comparación con el resto del país, Lima claramente provee de mejores instalaciones, servicios y capital humano, entre otros factores¹². Como fuere, es también evidente que los políticos provinciales, como Guillén en Arequipa, carecían de instrumentos políticos para contrarrestar esta recentralización de las actividades productivas. La recesión económica de finales de la década de 1990 exacerbó aun más esta situación.

Legados históricos

La revuelta de 2002 comparte un número de similitudes con el levantamiento que tomó lugar a mediados de la década de 1950, lo que sugiere la importancia no solo de condiciones económicas coyunturales sino también de continuidades históricas. A mediados de la década de 1950 una amplia gama de actores —incluyendo mercaderes de la cadena local de comercio, miembros del gremio local de abogados, estudiantes universitarios y trabajadores ferroviarios— se unió en el Frente Único de Defensa (FUD) y se enfrentó colectivamente a las políticas del régimen de Manuel Odría (1948-1956). Caravedo Molinari (1978, pp. 105-125) nota que las «políticas liberales» de Odría, como el crecimiento basado en las exportaciones, condujeron a un disloque económico serio en la región de Arequipa y a una posterior concentración de actividades industriales en Lima.

La burguesía local de Arequipa jugó un importante rol durante el alzamiento. Ayudó a identificar y definir los reclamos colectivos (por ejemplo, la centralización), asignar responsabilidades (al régimen de Odría) y proponer una solución (p.e., la resistencia colectiva)¹³. Los miembros de la cámara local de comercio incluso acordaron pagar los salarios y sueldos de los empleados y trabajadores que participaron en la protesta (Caravedo Molinari, 1978, p. 139).

¹² El PBI de Lima, junto al del país, representa aproximadamente un 50 por ciento. Gonzales de Olarte (2000) discute la recentralización económica durante la ola de reformas económicas neoliberales de Fujimori.

¹³ Para la élite de negocios de Arequipa, ver Hammergren (1974) y Durand (1982).

La revuelta provincial del año 2002 también fue una respuesta a la implementación de las políticas de mercado y a algunos de los problemas económicos que emergieron como secuelas de las políticas liberales de Odría. Sin embargo, mientras que el levantamiento del año 2002 se extendía, la afinidad popular por la burguesía local de la década de 1950 desapareció completamente para finales de 1990. Residentes de Arequipa rechazaron el respaldo a las políticas de privatización ofrecido por la cámara de comercio local (Ballón, 2003). Más importante aún: en 2002 fueron los políticos locales, antes que la élite económica local, quienes ayudaron a rearticular la identidad regional para dirigirla contra el neoliberalismo.

Contexto político

Antes de discutir la revuelta popular en Arequipa, podemos añadir unas pocas palabras sobre el contexto político previo a la llegada al poder de Toledo. Nacido en la región empobrecida de Áncash, el presidente Toledo levantó esperanzas sobre la posibilidad de disminuir los problemas económicos de las provincias periféricas. Durante su campaña política, Toledo prometió crear empleos para aliviar el desempleo proveniente del neoliberalismo.

Durante el régimen de Fujimori, además, el deterioro de la economía de Arequipa había creado un precedente en la relación entre la capital y las provincias. El alcalde Guillén fue un firme crítico del neoliberalismo y del fujimorismo. Para mencionar un ejemplo, en 1997, cuando Fujimori fue a Arequipa para inaugurar un nuevo estadio para 60 000 asistentes, el presidente alcanzó a decir solo unas pocas palabras antes de ser abucheado ampliamente por los presentes. No es de sorprender que los residentes de Arequipa dieran la bienvenida al colapso del régimen de Fujimori en 2000 y apoyaran ampliamente a Toledo. En Arequipa, Toledo venció a Fujimori en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2000, y a García en la primera y segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2001.

Durante la campaña electoral, Toledo prometió a los arequipeños que las compañías de electricidad de la ciudad no serían vendidas a inversionistas extranjeros; es más: firmó un documento garantizando lo dicho (Vargas Gutiérrez, 2002). Según Guillén, el gesto de Toledo llevó a la expectativa de que la relación entre Lima y Arequipa podría mejorar, y de que la imposición autocrática y centralizada de las reformas del mercado que dañaron la economía provincial era parte del pasado (Guillén, 2003).

El levantamiento

Estas expectativas probaron ser de corta duración cuando Toledo, una vez elegido presidente, decidió privatizar estas compañías sin ofrecer explicación por el cambio de posición. La resistencia a la venta comenzó a construirse pronto, en abril de 2002, y las autoridades locales iniciaron un proceso judicial buscando prevenir que se diera lugar a la privatización. Para comienzos de junio, más de una docena de

alcaldes de ciudades, dirigidos por Guillén, iniciaron una huelga de hambre. Para complicar el escenario político, en los días previos a la licitación (14 de junio), Toledo anunció que la privatización tendría lugar pese al descontento popular.

En esa coyuntura, algunos reportes indicaban que el entonces ministro del interior, Fernando Rospigliosi, habría señalado que solo una pequeña minoría de «muertos de hambre» se oponía a las iniciativas de privatización¹⁴. El ministro de justicia, Fernando Olivera, amenazó con abrir un proceso administrativo contra los jueces que bloquearan los planes del gobierno. De muchas maneras, el gobierno de Toledo reprodujo las formas autoritarias del régimen de Fujimori, pero en un contexto de mayores libertades políticas, y con una prensa más libre y viva que en la década de 1990. Las afirmaciones realizadas por varios oficiales del gobierno simplemente avivaron más el sentimiento popular contra la decisión de privatización. En las calles, miles de residentes locales corearon: «Ahora que digan que somos minoría».

Más importante aún, el alcalde Guillén cuestionó los supuestos beneficios de la privatización. Como lo expusiera luego, «las privatizaciones no redujeron la pobreza; en vez de ello, incrementaron el desempleo, los precios de los servicios, y la corrupción» (2003). Ciertamente, a diferencia de lo que sucedió en las privatizaciones de comienzos de la década de 1990, la cesión al sector privado de Egasa y Egesur no disfrutó de un «sentimiento público favorable» (Manzetti, 1999, p. 18), lo que complicó los objetivos del Estado.

En el proceso judicial que bloqueó la privatización, las autoridades locales cuestionaron la legalidad de la venta misma, reclamando que el gobierno central no era, en realidad, poseedor de las compañías eléctricas. Guillén también indicó que muchas de las conexiones eléctricas fueron pagadas por los beneficiarios mismos o parcialmente subsidiadas por la municipalidad de Arequipa, la cual supervisaba a esas compañías. En otras palabras, la privatización propuesta no distinguía la generación de electricidad de su distribución. La compañía belga Tractebel, único postor en la subasta, habría ganado derechos exclusivos sobre toda la electricidad de la ciudad. El otorgamiento de los derechos de distribución a compañías extranjeras como Tractebel denota así una forma de expropiación, similar a la privatización del agua en Cochabamba, Bolivia. Los residentes de Cochabamba también habían construido pozos y canales de agua a través de cooperativas. De haber continuado el proceso de privatización, se hubiera otorgado a la corporación Bechtel, con sede en Estados Unidos —el único postor en ese proceso—, derechos exclusivos sobre toda el agua de la ciudad (Finnegan, 2002).

¹⁴ En el momento de la protesta, Rospigliosi fue sindicado como autor de las siguientes declaraciones: «Solo unos mil muertos de hambre se oponen a las privatizaciones en Arequipa». Luego se conocería que Rospigliosi no pronunció estas palabras (*Caretas*, 2002b).

Luego de haber apoyado abrumadoramente a Toledo, los arequipeños prometían ahora derrocarlo con sus manifestaciones. Como sucedió con los ‘cacerolazos’ en Argentina, en que la gente tomó las calles golpeando ollas y sartenes a modo de protesta, los residentes de Arequipa hicieron lo propio. Llamando a una vieja costumbre, acudieron al tañido de campanas de la catedral principal de la ciudad, para llamar a la gente a tomar acción. A lo largo de la ciudad, la bandera peruana apareció sobre muchas de las casas como signo de solidaridad con la protesta.

La manifestación tuvo éxito. Los arequipeños revirtieron el estado de emergencia impuesto nada menos que haciendo caer al gabinete de Toledo a once meses de inaugurado. A fines de 2002, una resolución judicial declaró que las compañías eléctricas eran propiedad de la provincia de Arequipa (Paredes, 2002, p. 46), acabando efectivamente con cualquier plan del gobierno central de subastar estas compañías.

Los arequipeños se sintieron simplemente traicionados por Toledo, quien había prometido un enfoque más descentralizado y participativo (Tanaka, 2002, p. 24). El error del gobierno al no tomar en cuenta el descontento social provincial recordó a la imposición centralista y autocrática de las reformas económicas, que para finales de la década de 1990 ya estaban ampliamente desacreditadas. Sin embargo, el ‘arequipazo’ no fue un evento de protesta aislado: otras movilizaciones significativas contra el neoliberalismo fueron igualmente visibles y tuvieron un impacto económico comparable.

OTRAS MOVILIZACIONES CONTRA LA INVERSIÓN EXTRANJERA

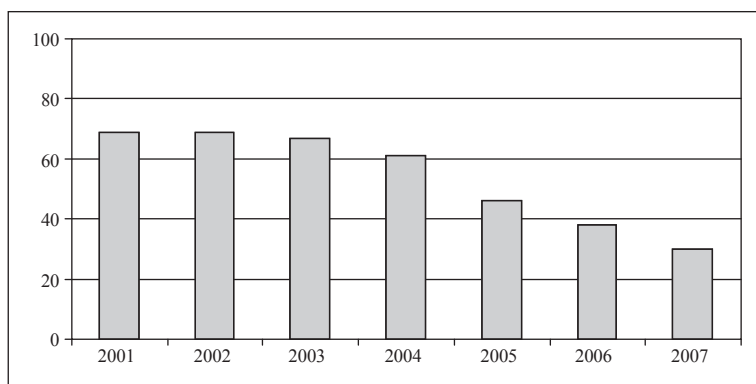
Un área de controversia se desarrolló alrededor de la industria minera. Como consecuencia de las políticas de liberalización y privatización de Fujimori, la inversión minera en Perú se incrementó en cinco veces durante la década de 1990. Solo en 1992, las compañías mineras buscaron hacerse de más denuncios de tierras que los que se lograron en los quince años previos (Bury, 2002). La minería, además, representa aproximadamente el 15 por ciento de toda la inversión extranjera que ha inundado al Perú desde Fujimori (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2005, p. 847). El fuerte énfasis colocado en la atracción de inversión extranjera durante el proceso de reestructuración de la economía peruana hizo de la minería una industria muy atractiva.

Las compañías mineras transnacionales respondieron muy favorablemente a este cambio en las políticas económicas: once de las veinte mayores corporaciones mineras del mundo ahora tienen operaciones en Perú (Bury, 2002, p. 6). Debido a la localización geográfica de la minería, que tiene lugar en la serranía, la explosión de esta actividad ha tenido impactos dramáticos en la población rural, entre los ciudadanos más pobres del Perú. Dado el efecto de deterioro de la minería sobre el medio ambiente, no es de sorprender que las compañías mineras transnacionales que operan en las zonas altas del Perú se hayan encontrado en repetidas ocasiones sitiadas

por manifestantes locales, nacionales y transnacionales. En efecto, este es el tipo más común de conflicto social en el Perú actual (Defensoría del Pueblo, 2009).

Al tiempo que estos conflictos están geográficamente segmentados, tienen alta notoriedad e impacto económico. Además, la conexión entre la inversión extranjera—claro indicador de la tendencia hacia la globalización y liberalización económica—y las protestas es irrefutable. Muchos de estos conflictos, llevados a cabo por habitantes locales, detuvieron un número significativo de actividades mineras. La mayoría de ellos tuvo lugar desde que Fujimori dejó el cargo, en el año 2000.

Figura 2. Índice de potencial de las políticas mineras en el Perú



Fuente: Instituto Frasier (2001-2007). El Índice de Potencial de Políticas reporta una puntuación de políticas atractivas desde la perspectiva de las gerencias de exploración minera. La medida es una medición estandarizada de 0 a 100, donde 100 es la mejor puntuación.

Los reportes del Instituto Frasier (2001-2007) confirman el impacto de estas movilizaciones. El Instituto Frasier conduce una encuesta entre compañías mineras metálicas y de exploración para determinar cómo las dotaciones de mineral y variables relativas a políticas públicas, como impuestos y regulaciones, afectan la inversión en exploración. La investigación provee un par de índices: el Índice de Potencial de Políticas (PPI, por sus siglas en inglés) y el Índice de Potencial Minero (MPI, por sus siglas en inglés). Estos índices sirven como un reporte a los gobiernos sobre cuán atractivas son sus políticas desde el punto de vista de un gerente de exploración minera. En los resultados para el periodo 2005-2006, por ejemplo, el índice MPI colocó a Perú en la cima de la muestra de 64 países, sugiriendo que el potencial puro de los recursos minerales del país era extremadamente alto. En contraste, el índice PPI—el cual tomaba en cuenta, entre otras cosas, la presencia de estabilidad política y conflictos sociales—cayó consistentemente desde 2003 (ver figura 2)¹⁵.

¹⁵ El Índice PPI es un índice compuesto que mide los efectos de las políticas de gobierno en la exploración, incluyendo incertidumbre con respecto a la administración, interpretación, y aplicación de las regulaciones existentes; regulaciones ambientales, duplicación e inconsistencia de las regulaciones;

En casi todos los casos, las protestas han sido provocadas por accidentes mineros que avivaron temores de contaminación ambiental presentes en la población local, o por los incumplimientos de las compañías mineras en sus compromisos de inversión en materia social. Algunas de las más grandes protestas han sido orquestadas por redes sociales locales y transnacionales, abarcando desde campesinado y comunidades hasta organizaciones no gubernamentales internacionales como Oxfam. Cada uno de los siguientes ejemplos muestra cómo la resistencia local a la operación de compañías mineras transnacionales ha sido al menos parcialmente efectiva en reducir el impacto de la minería en las comunidades locales¹⁶.

Los eventos de protesta más notorios contra la minería han tenido lugar en la provincia de Cajamarca, al noroeste del Perú. La compañía minera más grande del mundo, Newmont, con sede en Denver, enfrentó un conjunto de protestas en su mina de Yanacocha entre 1999 y 2006, algunas de las cuales se tornaron violentas¹⁷. El conflicto se desató en Yanacocha en diciembre de 1999, cuando más de seis mil pobladores locales bloquearon la entrada a la mina protestando contra los costos medioambientales y sociales de la actividad minera (Bury, 2002, p. 10). Según información recogida por Bury (2002, p. 13), los pobladores se mostraron preocupados sobre todo por la contaminación del agua, la reducción de su caudal, y por los males sociales que llegarían a las comunidades dentro del área de la explotación minera, como la prostitución, el crimen y problemas de endeudamiento.

En la investigación de Bury, los entrevistados que señalaron que sus recursos hídricos habían sido afectados se mostraron dos veces más propensos a participar en actividades de protesta en comparación a otros encuestados (Bury, 2002, p. 12). Los temores locales en torno a la polución del agua parecieron ser validados por organizaciones no gubernamentales internacionales. Solo en 1999, Newmont fue penalizado más de 159 veces por la Organización Mundial de la Salud por violar las prácticas necesarias para garantizar agua limpia (Bury, 2002). Percepciones negativas fueron alimentadas más adelante, en junio de 2000, cuando una compañía de transporte contratada por Newmont derramó mercurio tóxico a lo largo de 40 kilómetros de camino. El desacuerdo tuvo lugar una vez más en setiembre de 2004, cuando Newmont inició estudios de prospección en el Cerro Quilish. Por un mes entero, miles de manifestantes bloquearon la entrada de la mina, forzando

impuestos; incertidumbre con respecto a reclamos de tierras nativas y áreas protegidas; infraestructura; acuerdos socioeconómicos; estabilidad política; asuntos laborales; base de datos geológicos, y seguridad.

¹⁶ La información sobre estas protestas mineras fue tomada de *The Economist* (2005), Griffin (2006a, 2006b), Perlez y Bergman (2005); Weitzman (2005, 2006), y Teh-White (2005).

¹⁷ Los accionistas de la Minera Yanacocha incluyen a la Corporación Newmont Gold con sede en Denver (51 por ciento); Compañía de Minas Buenaventura, una compañía peruana (44 por ciento) y la Corporación Financiera Internacional, un miembro del Grupo del Banco Mundial (5 por ciento). La participación del IFC en Yanacocha fue también un importante punto de atención para activistas globales. Agradezco a un crítico anónimo por hacer notar este punto.

a Newmont a usar helicópteros para continuar con las operaciones. Los reportes indican que las protestas continuaron a pesar de la presencia de más de 150 oficiales de operaciones especiales, quienes usaron gas lacrimógeno, arrestaron a un número de manifestantes, e incluso hirieron de bala a un manifestante en la pierna (Perlez y Bergman, 2005).

El mismo mes se llevó a cabo un paro regional, organizado por manifestantes anti-minería y por el padre Marco Arana y su organización Grufides, quienes recibían apoyo internacional de Oxfam. Al final, las protestas tuvieron éxito en su propósito de evitar que Newmont llevara adelante su proyecto en el Cerro Quilish, y la licencia de la compañía para poder explotar el yacimiento fue revocada. En diciembre de 2004 tres provincias fueron paralizadas por otra protesta de nivel regional contra la minería. A fines de agosto de 2006, Newmont fue forzado a cerrar la producción por un día entero debido al bloqueo llevado a cabo por los agricultores. La actividad beligerante ha continuado en Yanacocha hasta el día de hoy.

Protestas violentas iniciaron en la mina Tambo Grande, en la provincia norteña de Piura, en febrero de 2001 (Muradian, Martínez-Alier y Correa, 2003) cuando alrededor de cinco mil personas «asaltaron las oficinas de la compañía, quemando maquinaria y destruyendo modelos de las casas para reubicar a la gente» (Muradian, Martínez-Alier y Correa, 2003, p. 780). Un líder de la protesta fue asesinado por arma de fuego un mes después. Numerosos sectores se opusieron al proyecto minero, incluyendo al arzobispo de la diócesis de Piura y al Frente por la Defensa de Tambo Grande (Muradian, Martínez-Alier y Correa, 2003, p. 780). En 2002, un sondeo de opinión financiado por Oxfam UK mostró que 94 por ciento de los votantes de Tambo Grande estaban en contra del proyecto. Las organizaciones no gubernamentales involucradas en el conflicto incluían a Oxfam Estados Unidos, Oxfam Reino Unido, el Mineral Policy Center, el Environmental Mining Council of British Columbia, y los Amigos de la Tierra, de Costa Rica y Ecuador (Muradian, Martínez-Alier y Correa, 2003, p. 780).

Una encuesta conducida por Muradian y colegas (2003, p. 780) encontró a los residentes en la localidad, temerosos del impacto ambiental del proyecto propuesto; 85 por ciento estaba en contra del proyecto, la mayoría se mostraba desconfiada de que el gobierno fortalecería las leyes medioambientales, 70 por ciento creía que los niveles de polución serían altos, y un 47 por ciento muy altos. Las protestas continuaron en junio de 2002, cuando más de mil pobladores de todo el Perú se movilaron a Lima contra el proyecto Tambo Grande. Otros tres días de protestas tuvieron lugar en noviembre de 2003 en esa localidad. Las protestas continuaron hasta que el proyecto fue finalmente abandonado en 2005. Operado por la compañía canadiense Manhattan Minerals; Tambo Grande fue permanentemente cerrada en febrero de ese año; Manhattan Minerals adujo falta de fondos debido a las continuas protestas.

A fines de mayo de 2005, una de las más respetadas compañías mineras multinacionales que operaba en el Perú, BHP Billiton (compañía anglo-australiana y la

tercera más grande del mundo) fue forzada a detener sus operaciones en su proyecto de cobre Tintaya por un mes, debido a las continuas protestas y asaltos de los campesinos en el lugar. Alrededor de dos mil manifestantes tomaron, en la práctica, la tercera mina de cobre más grande del mundo por un periodo breve. Al menos tres mil manifestantes se opusieron al plan de BHP Billiton de abrir nuevas operaciones, las cuales, según creían los pobladores, contaminarían los suministros de agua. Los manifestantes también estaban descontentos con el monto de inversión comunal que BHP Billiton estaba colocando en la región, aduciendo que la empresa no entregó el monto inicialmente prometido. BHP Billiton intentó llegar a un acuerdo con sus manifestantes ofreciendo un paquete de inversión valuado en 330 000 dólares por año, pero el esfuerzo fue inútil. Protestas continuas aparentemente forzaron la venta de Tintaya en mayo de 2006 a otra compañía minera con sede en Suiza, Xstrata.

Estos conflictos en torno a la minería ilustran los efectos paradójales del neoliberalismo, que debilita simultáneamente ciertos tipos de resistencia popular mientras que activa otros. Esto contradice además el sentido común que señala que las protestas resultan tan difíciles de organizar en las áreas rurales que resulta poco probable que ocurran. Finalmente, estos conflictos sugieren que el lugar en que se desarrollan las protestas, tradicionalmente en las ciudades ha cambiado.

CONCLUSIONES

Desde comienzos de la década de 1990, el Perú ha experimentado reformas económicas orientadas al mercado. Estas reformas tuvieron éxito en restaurar la estabilidad macroeconómica y reimpulsar el crecimiento. La literatura que privilegia el efecto de atomización social asocia a la extensión del mercado con la despolitización, de modo tal que los actores sociales son presuntamente receptores pasivos de los efectos dolorosos de las reformas económicas. De forma consistente con estudios empíricos recientes a escala nacional (Arce y Bellinger, 2007), este estudio de caso contradice estas suposiciones. La liberalización de la economía ha repolitizado la acción colectiva al alterar el patrón tradicional de organización social basado en clases sociales. Diversos y nuevos actores han emergido para conducir los esfuerzos de resistencia popular. Como este artículo ha documentado, las políticas de mercado han provocado un número de movilizaciones, geográficamente segmentadas, contra las políticas y programas orientados al mercado en el Perú. Futuras investigaciones deberían de explorar las implicancias de este nuevo patrón de organización y movilización para satisfacer las necesidades apremiantes de los pobres de la región.

En sentido contrario a la literatura Estado-céntrica enfocada en las políticas de reforma económica (Haggard y Kaufman, 1995), la lección central de la ola actual de movilización en el Perú es que las decisiones de política nacional no pueden ser tomadas exclusivamente por las instancias del Legislativo y el Ejecutivo, sino que deben ser llevadas a cabo en consulta con la sociedad civil. Las protestas

sociales constituyen un rechazo explícito a las decisiones realizadas por actores e instituciones democráticas. Todas juntas, las protestas territorializadas representan la «reacción protectora» de la sociedad (Polanyi, 1944) en respuesta a los esfuerzos por crear una sociedad de mercado.

Investigaciones futuras también deben examinar las consecuencias espacialmente distribuidas de la liberalización económica; un tema que los estudios aún continúan ignorando en el país. En el caso peruano, las disparidades de crecimiento entre las regiones aparentemente fueron importantes en dar forma y montar procesos exitosos de acción colectiva. El gobierno de Toledo restituyó la estructura descentralizada del país en un esfuerzo por modernizar las economías regionales. El proceso de descentralización ha cambiado ciertamente el lugar donde las protestas se desarrollan, y al menos hasta muy recientemente, ha fomentado un incremento en su número. Como ha mostrado este artículo, este incremento señala un cambio importante en la estructura de oportunidades políticas, que ha permitido un uso mayor del recurso a la protesta. Si el proceso de descentralización se estanca, los gobiernos subnacionales podrían también servir como base para territorializar aun más el descontento con las políticas económicas neoliberales, como se ha visto recientemente en Bolivia.

REFERENCIAS

- Apoyo. (2002a). *Informe de opinión. Julio*. Lima: Apoyo S.A.
- Apoyo. (2002b). *Informe de opinión. Agosto*. Lima: Apoyo S.A.
- Apoyo. (2002c). *Informe de opinión. Diciembre*. Lima: Apoyo S.A.
- Apoyo. (2003). *Informe de opinión. Mayo*. Lima: Apoyo S.A.
- Arce, M. (2010). Algunos apuntes sobre los movimientos y protestas sociales en el Perú. En C. Meléndez y A. Paniagua (Eds.), *La iniciación de la política: El Perú en perspectiva comparada* (pp. 273-294). Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Arce, M. y Bellinger, P. T. Jr. (2007). Low-Intensity Democracy Revisited: The Effects of Economic Liberalization on Political Activity in Latin America. *World Politics*, 60(1), 97-121.
- Arce, M. y Rice, R. (2009). Societal Protest in Post-stabilization Bolivia. *Latin American Research Review*, 44(1), 88-101.
- Assies, W. (2003). David versus Goliath in Cochabamba: Water Rights, Neoliberalism, and the Revival of Social Protest in Bolivia. *Latin American Perspectives*, 30(3), 14-36.
- Auyero, J. (2002). Los cambios en el repertorio de la protesta social en la Argentina. *Desarrollo Económico*, 42(166), 187-210.
- Banco Interamericano de Desarrollo. (2005). *The Politics of Policies: Economic and Social Progress in Latin America, 2006 Report*. Washington D. C.: Banco Interamericano de Desarrollo.
- Ballón, E. (2002). El toledismo y el movimiento social. En E. Ballón (Ed.), *Perú hoy, Toledo: a un año de gobierno*. Lima: Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (DESCO).

- Ballón, E. (2003). Investigador del Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (DESCO). Entrevista al autor. Lima, 07 de noviembre.
- Banco Mundial. (2003). *Restoring Fiscal Discipline for Poverty Reduction in Perú: A Public Expenditure Review*. Washington D. C.: Banco Mundial.
- Barr, R. (2005). Bolivia: Another Uncompleted Revolution. *Latin American Politics and Society*, 47(3), 69-90.
- Bury, J. (2002). Livelihoods, Mining, and Peasant Protests in the Peruvian Andes. *Journal of Latin American Geography*, 1(1), 3-19.
- Calderón, F. y Szmukler, A. (2000). *La política en las calles: política, urbanización y desarrollo*. La Paz: Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social / Universidad Andina.
- Caravedo Molinari, B. (1978). *Desarrollo desigual y lucha política en el Perú 1948-1956: la burguesía arequipeña y el Estado peruano*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.
- Caravedo Molinari, B. (1988). *Ciudad y región: los límites del nuevo descentralismo*. Lima: M. J. Bustamante de la Fuente.
- Caretas (2002a). ¿El que no llora no mama? Revista Caretas. Lima, 05 de diciembre.
- Caretas (2002b). El volcán Characato. Revista Caretas. Lima, 27 de junio.
- Caretas (2002c). ¡Qué calor hace en Tarapoto! Revista Caretas. Lima, 02 de agosto.
- Caretas (2003). Huelgan comentarios. Revista Caretas. Lima, 22 de mayo.
- Carrión, J. F. (Ed.). (2006). *The Fujimori Legacy: The Rise of Electoral Authoritarianism in Perú*. University Park: Pennsylvania State University Press.
- Conaghan, C. M. (2005). *Fujimori's Perú: Deception in the Public Sphere*. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.
- Contreras, C. (2000). Centralismo y descentralismo en la historia del Perú independiente. Informe de Trabajo N.º 127. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.
- Correo (2003). Nueve presidentes regionales involucrados en actos irregulares. Diario Correo. Lima, 10 de noviembre.
- De la Mata, G. (2002). De los «estallidos» provinciales a la generalización de las protestas en Argentina. *Nueva Sociedad*, 182, 121-138.
- Debate (1997). Obtener poder para resolver problemas. Revista Debate. Lima, octubre-noviembre, pp. 6-10.
- Defensoría del Pueblo. (2009). *Conflictos sociales conocidos por la Defensoría del Pueblo al 30 de abril del 2009*. Informe N.º 62. Lima: Dirección de la unidad de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo.
- El Comercio (2003a). Involucran a 6 presidentes de región en hechos irregulares. Diario El Comercio. Lima, 14 de julio.
- El Comercio (2003b). Juzgado cita a ex gerente Unzueta. Diario El Comercio. Lima, 9 de julio.
- El Comercio (2003c). Mufarech ofreció «favores» antes de ganar elección. Diario El Comercio. Lima, 10 de julio.
- El Comercio (2004). Imputan a Dañino la pérdida de autoridad. Diario El Comercio. Lima, 10 de mayo.
- El Comercio (2007). Las protestas ocasionan al país 200 millones de soles diarios en pérdidas. Diario El Comercio. Lima, 12 de julio.

- Durand, F. (1982). Arequipa: clases sociales, regionalismo e industrialización. *Working Paper*. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Finnegan, W. (2002). Leasing the Rain. *The New Yorker*, 08 de abril.
- Instituto Fraser. (2001-2007). *Annual Survey of Mining Companies*. Vancouver: Instituto Fraser.
- Garay, C. (2007). Social Policy and Collective Action: Unemployed Workers, Community Associations, and Protest in Argentina. *Politics and Society*, 35(2), 301-328.
- Gestión* (2003a). Mandatario: se duplicará sueldos de maestros al término de mi gobierno. Diario *Gestión*. Lima, 14 de mayo.
- Gestión* (2003b). Silva Ruete reitera: «no hay dinero» para aumento de sueldos a maestros. Diario *Gestión*. Lima, 16 de mayo.
- Gonzales de Olarte, E. (2000). *Neocentralismo y neoliberalismo en el Perú*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos / Consorcio de Investigación Económica y Social.
- Gonzales de Olarte, E. (2002). Descentralización a la peruana. *Debate*, 118, 16-20.
- Griffin, G. (2006a). Newmont Mining Begins to Close Peru Site over Protests. *Denver Post*, 29 de agosto.
- Griffin, G. (2006b). Newmont Mine in Peru Set to Reopen. *Denver Post*, 30 de agosto.
- Grindle, M. S. (2000). *Audacious Reforms: Institutional Invention and Democracy in Latin America*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Guillén, J. M. (2003). Alcalde de Arequipa. Entrevista personal. Arequipa, 04 de junio.
- Haggard, S. y Kaufman, R. (1995). *The Political Economy of Democratic Transitions*. Princeton: Princeton University Press.
- Hammergren, L. (1974). *Politics in the Periphery: A Study of National Integration and the Development of Local Political Organization*. Sustentación de tesis doctoral. Universidad de Wisconsin.
- Hochstetler, K. (2006). Rethinking Presidentialism: Challenges and Presidential Falls in South America. *Comparative Politics*, 38(4), 401-418.
- Huntington, S. P. (1968). *Political Order in Changing Societies*. Nueva Haven: Yale University Press.
- Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2002). *Perú: compendio estadístico 2002*. Lima: Instituto Nacional de Estadística e Informática.
- Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2005). *Perú: compendio estadístico 2005*. Lima: Instituto Nacional de Estadística e Informática.
- Kohl, B. (2002). Stabilizing Neoliberalism in Bolivia: Popular Participation and Privatization. *Political Geography*, 21, 449-472.
- Kurtz, M. J. (2004). The Dilemmas of Democracy in the Open Economy: Lessons from Latin America. *World Politics*, 56(2), 262-302.
- La República* (2003). Ustedes no van a dejar que el APRA tenga el poder. Diario *La República*. Lima, 26 de junio.
- Laserna, R. y Ortega, J. (2003). Reflexiones sobre violencia, conflicto y dialogo social en Bolivia. Boletín 8. Cochabamba: Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (CERES).
- Llosa, E. (2003). La batalla por la carretera interoceánica en el sur peruano: ¿localismo o descentralismo? *Working Paper* N.º 129. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.

- López-Maya, M. (2002). Venezuela After the Caracazo: Forms of Protest in a Deinstitutionalized Context. *Bulletin of Latin American Research*, 21(2), 199-218.
- López-Maya, M. y Lander, L. E. (2004). The Struggle for Hegemony in Venezuela: Poverty, Protest, and the Future of Democracy. En J.-M. Burt y P. Mauceri (Eds.), *Politics in the Andes: Identity, Conflict, Reform* (pp. 207-227). Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.
- Lucero, J. A. (2001). Crisis and Contention in Ecuador. *Journal of Democracy*, 12(2), 59-73.
- Mainwaring, S. y Scully, T. R. (1995). Introduction: Party Systems in Latin America. En S. Mainwaring y T. R. Scully (Eds.), *Building Democratic Institutions: Party Systems in Latin America* (pp. 1-34). Stanford: Stanford University Press.
- Manzetti, L. (1999). *Privatization South American Style*. Oxford: Oxford University Press.
- Maxfield, S. (1997). *Gatekeepers of Growth: The International Political Economy of Central Banking in Developing Countries*. Princeton: Princeton University Press.
- McAdam, D., Tarrow, S., y Tilly, C. (2001). *Dynamics of Contention*. Nueva York: Cambridge University Press.
- Ministerio del Interior (2002). Memoria del Servicio Nacional de Inteligencia del Ministerio del Interior del Perú. Lima: Ministerio del Interior.
- Muradian, R., Martínez-Alier, J. y Correa, H. (2003). International Capital versus Local Population: The Environmental Conflict of the Tambo-grande Mining Project, Peru. *Society and Natural Resources*, 16, 775-792.
- Murillo, M. V. y Ronconi, L. (2004). Teachers' Strikes in Argentina: Partisan Alignments and Public-sector Labor Relations. *Studies in Comparative International Development*, 39(1), 77-98.
- Nickson, A. y Vargas, C. (2002). The Limitations of Water Regulation: The Failure of the Cochabamba Concession in Bolivia. *Bulletin of Latin American Research*, 21(1), 99-120.
- Paredes, F. (2002). Gobernabilidad regional: preguntas desde Arequipa. *Economía y Sociedad*, 46, 44-48.
- Perlez, J. y Bergman, L. (2005). Tangled Strands in Fight over Perú Gold Mine. *New York Times*, 25 de octubre.
- Perú Económico (2001). La «nevada» arequipeña. *Revista Perú Económico*. Lima, 19-20. de junio, p. 23.
- Perú Económico (2002a). *Revista Perú Económico*. Lima, abril, pp. 7-8.
- Perú Económico (2002b). Regionalización: un circo de múltiples pistas. *Revista Perú Económico*. Lima, noviembre.
- Polanyi, K. (1944). *The Great Transformation*. Nueva York: Farrar and Rinehart.
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2002). *Informe sobre el desarrollo humano Perú 2002: aprovechando las potencialidades*. Lima: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
- Przeworski, A. (1991). *Democracy and the Market: Political and Economic Reforms in Eastern Europe and Latin America*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Roberts, K. M. (1996). Economic Crisis and the Demise of the Legal Left in Peru. *Comparative Politics*, 29(1), 69-92.
- Semana Económica. (2001). «El que no llora no mama?». *Revista Semana Económica*. Lima, 30 de setiembre, pp. 3-4.

- Slater, D. (1991). Regionalización en una época de crisis social: Perú, 1985-1990. *Revista Latinamericana de Estudios Urbano-Regionales*, 17(51), 33-41.
- Superintendencia de Banca y Seguros. (2003). Data on regional credit allocation. Disponible en www.sbs.gob.pe. Lima: Superintendencia de Banca y Seguros.
- Tanaka, M. (2002). La dinámica de los actores regionales y el proceso de descentralización: ¿el despertar del letargo? Informe de trabajo N.º 125. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.
- Tarrow, S. (1998). *Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Teh-White, K. (2005). A Tale of Two Mines. *The Age*, (Melbourne), 14 de julio, p. 3.
- The Economist*. (2005). Halting the Rush Against Gold. *The Economist*. Nueva York, 05 de febrero.
- The New York Times*. (2000). Bolivia Makes Key Concessions to Indians. *The New York Times*. Nueva York, 07 de octubre, p. A8.
- The New York Times*. (2003). Unrest Clouds Bolivian Leader's Future. *The New York Times*. Nueva York, 10 de marzo, p. A6.
- Vargas Gutiérrez, J. L. (2002). ¡Erupcionó Arequipa! *Quehacer*, 136, 72-77.
- Weitzman, H. (2005). Mining Groups Struggle to Obtain «Social License» for Their Operations in Perú. *Financial Times* (Londres), 04 de junio, p. 10.
- Weitzman, H. (2006). Roof Caves in for Mining Groups in Perú. *Financial Times* (Londres), 31 de agosto, p. 21.
- Wolff, J. (2005). Ambivalent Consequences of Social Exclusion for Real-Existing Democracy in Latin America. *Journal of International Relations and Development*, 8(1), 58-87.
- Wolff, J. (2007). (De-)Mobilising the Marginalised: A Comparison of the Argentine Piqueteros and Ecuador's Indigenous Movement. *Journal of Latin American Studies*, 39(1), 1-29.
- Yashar, D. J. (1998). Contesting Citizenship: Indigenous Movements and Democracy in Latin America. *Comparative Politics*, 31(1), 23-42.
- Zermeño, S. (1990). Crisis, Neoliberalism, and Disorder. En J. Foweraker y A. L. Craig (Eds.), *Popular Movements and Political Change in Mexico*. Boulder: Lynne Rienner.